



## Forjando futuros: educación transformadora para la justicia climática y socioambiental en América Latina y el Caribe

En un hito histórico para los derechos humanos y el medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021, y la Asamblea General de la ONU en 2022, adoptaron resoluciones en las que se reconoce explícitamente el derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Refrendando este compromiso, el Comité de Derechos del Niño (CDN) publicó en 2023 la Observación General relativa a los derechos del niño y el

medio ambiente, con énfasis en el cambio climático (CRC/C/GC/26).

Los desastres ambientales causados por fenómenos climáticos extremos, muchos de los cuales están relacionados con la intervención humana, están haciendo que el planeta sea un lugar cada vez más difícil de habitar. Aunque algunos Estados están tomando medidas para enfrentarlos, aún queda mucho por hacer.

### Impactos desproporcionados en América Latina y el Caribe

La situación en América Latina y el Caribe es preocupante. Se estima que 169 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por al menos dos riesgos climáticos y ambientales, mientras que 47 millones de niños y niñas (o uno en cada cuatro) viven en áreas afectadas por al menos cuatro eventos climáticos extremos.

El Informe Especial sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos en las Américas (CIDH/REDESCA) destaca una clara injusticia: los grupos que menos contribuyen a las emisiones de contaminantes son los que sufren de manera más directa e intensa los efectos del cambio climático y de la degradación ambiental. Estos incluyen mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas en situación de migración, discapacidad y poblaciones rurales o en situación de pobreza. Estas poblaciones vulnerables no solo enfrentan mayores riesgos, sino que, a menudo se ven forzadas a desplazarse para escapar de tormentas, inundaciones, sequías e incendios. Además, suelen estar más expuestas a productos tóxicos y enfermedades, así como a las limitaciones de los sistemas alimentarios y sanitarios que se ven afectadas por estos fenómenos.

El impacto que tienen las catástrofes ambientales en los sistemas educativos también es profundamente significativo. Según datos de UNICEF, cada año 40 millones de niños y niñas se ven privados de asistir a clases, ya sea por el cierre temporal de las escuelas, la destrucción de centros educativos o la deserción escolar. Los eventos climáticos extremos no solo interrumpen la educación, sino que también agravan los desafíos existentes, como la pobreza, la inseguridad alimentaria, el acceso a servicios de salud y a mecanismos de protección. Además tienden a aumentar la incidencia de enfermedades, problemas de salud mental, expansión de conflictos comunitarios, armados, actividades ilícitas y violencia de género. Las infancias son particularmente vulnerables a estas dificultades, lo que subraya la importancia de abordar estos retos de manera integral.